

Estados Unidos y América Latina. Los cambiantes contornos del imperio: jerarquías, redes y clientes*

The US and Latin America.
Changing contours of empire:
Hierarchy, networks and clients

James Petras**

Resumen

En este estudio se analizan las diversas formas del imperio y el imperialismo en el contexto contemporáneo y global, distinguiéndose los procesos políticos de dominación desde los estados centrales hacia otros periféricos por

* Este trabajo inédito surge a partir de las múltiples investigaciones del autor en el ámbito latinoamericano, considerando esta vez las relaciones entre el imperialismo norteamericano y la aparición de nuevos movimientos sociales y gobiernos de izquierda en América Latina. La autoría de la traducción del original en inglés al castellano, pertenece a los profesores-investigadores del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile PhD Clara Olmedo y PhD Juan Carlos Skewes.

** Ph. D. en Sociología por University of California, Berkeley (1967) y profesor emérito por Binghamton University, New York, USA. Binghamton University, PO Box 6000 Binghamton, NY 13902 E-Mail: jpetras@binghamton.edu

medio de intensas reformas neoliberales. Para tal caso, se revisan la acción imperialista de Estados Unidos y de los estados europeos y las relaciones que éstos establecen con los estados clientes y contrarios de América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Asia. Por otro lado, al estudiar la historia del imperialismo en las últimas décadas, se demuestra que esta forma de la política no es lo suficientemente fuerte como para esconder su intervencionismo o para evitar el brote de movimientos sociales capaces de contrarrestar el crecimiento de la misma.

Palabras clave: imperialismo, neoliberalismo, Estados Unidos, América Latina, movimientos sociales.

Abstract

In this study the diverse forms of the empire and imperialism in the contemporary and global context are analyzed, distinguishing the political processes of domination from the central states towards other peripheral states through intense neoliberal reforms. On the one hand, the imperialistic action of the United States and the European states and the relations that these establish with the states clients and opposites of Latin America and the Caribbean, Oriente Medio and Asia are reviewed. On the other hand, when studying the history of imperialism in the last decades, demonstrates that this form of the policy is not the sufficiently strong thing as to hide its interventionism or to avoid social movements able to resist the growth of the same one.

Key words: imperialism, neoliberalism, United States, Latin America, social movements.

El sistema imperial es mucho más complejo de lo que comúnmente se refiere o conoce como Imperio Norteamericano (Hardt and Negri 2000; Petras 2002). El imperio Norteamericano, con su amplia red de inversiones financieras, bases militares, corporaciones multinacionales y estados clientes, es el componente más importante del sistema imperial global (Johnson 2004). Sin embargo, incurriríamos en un reduccionismo si desestimamos las complejas jerarquías, redes, estados seguidores y clientes que conforman el sistema imperial contemporáneo (Petras y Veltmeyer 2007). Para entender el imperio e imperialismo de hoy se requiere analizar el complejo y dinámico sistema de estratificación imperial.

La Jerarquía del Imperio

A través de una clasificación de países, que tome en consideración su organización política, económica, diplomática y militar, podría lograrse un mejor entendimiento de la estructura de poder del sistema imperial mundial. A continuación propongo un esquema de este sistema:

Jerarquía del Imperio

(desde arriba hacia abajo)

- a. Estados Imperiales Centrales (EIC)
- b. Nuevos Poderes Imperiales Emergentes (NPIE)
- c. Regímenes Cliente-Semi-Autónomos (RCSA)
- d. Regímenes Cliente-Colaborador (RCC)
- e. Estados Anti-imperialistas
 - Cuba y Venezuela
 - Terreno de Oposición
 - Resistencia armada y movimientos sociales

A la cabeza del sistema imperial están los Estados Imperiales Centrales (EIC) que proyectan su poder a escala mundial, penetrando las economías del resto del mundo,

y cuyas clases gobernantes dominan el campo de las inversiones y el mercado financiero. En la cima del sistema imperial mundial están Estados Unidos, la Unión Europea (fuertemente estratificada) y Japón. Liderados por Estados Unidos, estos estados han articulado redes de “estados seguidores del imperio” (estados hegemónicos regionales) y de estados clientes o vasallos, que frecuentemente actúan como fuerzas militares vicarias. Los estados imperiales centrales funcionan coordinadamente para romper las barreras que impiden su expansión, mientras compiten entre sí por sacar ventajas para sus propios estados e intereses multinacionales (Petras y Veltmeyer 2006).

Por debajo de los EIC se encuentran los Nuevos Poderes Imperiales Emergentes (NPIE), léase China, India, Canadá, Rusia y Australia. Los NPIE también están sujetos a la penetración imperial, mientras ellos se expanden hacia países subdesarrollados vecinos y ricos en recursos extraíbles. Los NPIE están articulados con los estados imperiales centrales a través de inversiones conjuntas, al tiempo que compiten por el control de los recursos extraíbles en países subdesarrollados. Los NPIE siguen al pie de la letra los pasos de los poderes imperiales y, en algunos casos, sacan ventajas de los conflictos para mejorar sus propias posiciones.

Por ejemplo, la estrategia actual de expansión de China e India, al igual que las tempranas prácticas imperiales de Estados Unidos y Europa (1880-1950), apunta a las inversiones en minería extractiva y petrolífera que les permiten sostener su propio proceso de industrialización local. China invierte y firma

acuerdos de comercio, del tipo colonial, con países de América Latina, lo cual le permite comprar cobre chileno, hierro brasileño, níquel cubano, petróleo venezolano y exportar sus propios productos manufacturados (OECD 2005-2006).

Más abajo, en la jerarquía del sistema imperial, se encuentran los Regímenes Clientes Semi-Autónomos (RCSA). Entre ellos están Brasil, Chile y Bolivia. Estos estados tienen una sólida base económica nacional, apoyada en la operación de empresas públicas y privadas en sectores económicos estratégicos. Estos estados son gobernados por regímenes que buscan diversificar sus mercados, aunque sus economías dependen fuertemente de la exportación hacia los estados imperiales emergentes. Por otra parte, estos países son agro-mineral exportadores y comparten las ganancias y beneficios con empresas multinacionales de los estados imperiales. Además, la categoría de RCSA incluye a países semi-industrializados como Brasil y Argentina, que también son agro-mineral exportadores, con un débil sector industrial como es el caso de Bolivia y Chile. La élite agro-minera de los RCSA mantiene sólidos lazos con grupos financieros dominantes de los países imperiales, al tiempo que invierte fuertemente en el sector inmobiliario y financiero, y mantienen cuentas bancarias en el extranjero.

Las élites de los RCSA colaboran, en aspectos claves de la Guerra Imperial, con los sectores gobernantes de los poderes imperiales, tal fue el apoyo que éstas brindaron a la invasión de Estados Unidos en Haití, la provisión de tropas a África, el respaldo a políticas globales neoliberales y ocupaciones de sectores

económicos estratégicos. Sin embargo, y en algunos casos, los propios intereses de estas élites, y el rol que juegan los movimientos sociales nacionales, determinan algunos conflictos con los poderes imperiales. Por ejemplo, Brasil, Chile y Argentina no coinciden con los intentos de Estados Unidos de debilitar el gobierno nacionalista de Venezuela. Estos países mantienen rentables negocios e inversiones en el sector energético venezolano. Por otra parte, a estos países no les interesa apoyar intentos de golpes militares que terminarían debilitando su propia legitimidad entre sectores y electores que simpatizan con el presidente Hugo Chávez. Aunque los RCSA están estructuralmente integrados al sistema imperial, éstos mantienen un cierto grado de autonomía en lo que respecta a la formulación y ejecución de políticas nacionales e internacionales, lo que eventualmente podría generar conflictos con los intereses imperiales.

Más allá de esta relativa autonomía, estos regímenes proveen de “mercenarios” políticos y militares que sirven a los países imperialistas. Esta situación se hizo evidente en el caso de Haití. Después de la invasión estadounidense y el derrocamiento del electo presidente Arístides en 2004, Estados Unidos logró reclutar y asegurar fuerzas de ocupación provenientes de los regímenes clientes semi-autónomos. El presidente Lula Da Silva de Brasil envió un gran contingente militar y un general brasileño lideró las fuerzas militares mercenarias en Haití. Gabriel Valdés de Chile, en calidad de funcionario superior de las Naciones Unidas, lideró la administración de la ocupación, supervisando la sangrienta represión en contra de los movimientos de resistencia haitianos. Otro cliente semi-autónomo, Bolivia, contribuyó con contingentes militares junto a soldados

de Uruguay, Panamá, Paraguay, Colombia, y Perú. El presidente Evo Morales justificó la colaboración de su administración con Estados Unidos señalando que el contingente boliviano en Haití tenía una “misión de paz”. Entre diciembre del 2006 y febrero del 2007, tropas de Brasil, Bolivia y Argentina formaron parte de un masivo asesinato de haitianos que se produjo durante una invasión en las zonas más pobres y densamente pobladas de Haití. Un punto fundamental a considerar aquí es que, debido a que Washington está actualmente comprometido en dos guerras, Medio Oriente y Oeste Asiático, la vigilancia y represión de los movimientos anti-imperialistas que emergen en otras regiones depende, en gran parte, de los estados clientes del poder imperial.

En el último eslabón de la jerarquía imperial se encuentran los Regímenes Clientes Colaboradores (RCC). Estos incluyen a Colombia, Perú, Paraguay y México, países gobernados por elites políticas-autoritarias que dependen de los estados imperiales para obtener armas, apoyo financiero y político. A su vez, estos países brindan una gran oportunidad de explotación de mano de obra barata, tierras, recursos naturales y exportación de materias primas. A diferencia de los RCSA, las exportaciones de los RCC tienen un mínimo de valor agregado, ya que el proceso de industrialización de sus productos se produce en los países imperiales. Los países con RCC están gobernados por élites predatoras, rentistas, cleptocráticas y sin ninguna vocación empresarial. Frecuentemente, estas élites proveen soldados mercenarios para servir a intervenciones y ocupaciones, cuya misión es imponer regímenes clientes en países-objetivo de los estados imperiales. En lo que hace

al robo de riqueza, explotación de miles de trabajadores, desplazamiento de campesinos y destrucción del medio ambiente, los regímenes clientes son colaboradores subordinados del poder imperial.

Todos los regímenes clientes conforman una red vital al mantenimiento del poder imperial. Estos regímenes complementan fuerzas de ocupación imperial, facilitando la extracción de materias primas. Sin estos “mercenarios de color” los poderes imperiales tendrían que expandir sus propias fuerzas militares, provocando fuerte oposición interna y generando resistencias externas a sus explícitas guerras de recolonización. Además, estos mercenarios son menos costosos en términos financieros y de pérdida de vidas de soldados imperiales. A lo largo de la historia reciente, vemos que los regímenes clientes son la principal línea de defensa del imperio, mientras que las juntas militares y las intervenciones directas de Estados Unidos conforman la segunda y tercera línea respectivamente de defensa del poder imperial.

Estados y movimientos independientes

El sistema imperial penetra profundamente en las sociedades, economías y estados de América Latina. Pero el sistema imperial no es aún ni omnipotente ni omnipresente. Los cuestionamientos a este sistema provienen por dos vías: los estados independientes y los fuertes movimientos sociales y políticos.

Los estados independientes son regímenes de oposición que, al mismo tiempo, se convierten en objetivo-blanco de los estados imperiales. Venezuela y Cuba son ejemplos de estados

anti-imperialistas dispuestos a rechazar las políticas de los poderes imperiales, y de manera particular las intervenciones militares. Estos estados también se oponen a las demandas imperiales de libre acceso a mercados, recursos y establecimiento de bases militares. Estos regímenes independientes tienen similares políticas sociales-progresistas, un amplio apoyo popular, identidades seculares, y estrategias de desarrollo económico centradas en el estado y consistentes con una oposición a la agresión imperial. Pero todos ellos enfrentan amenazas militares y programas de desestabilización, diseñados para reemplazar los gobiernos independientes con regímenes clientes.

Dominios cuestionables

Las redes y jerarquías imperiales en América Latina se estructuran, a nivel nacional, en torno a las relaciones de clases y de poder. Esto significa que la permanencia de todo el sistema imperial depende de la dominación que las clases gobernantes impongan a su población (situación por de más compleja dada la desigualdad entre clases gobernantes y gobernadas). Actualmente, la resistencia armada y muchos movimientos sociales, en diferentes países, están cuestionado el sistema imperial.

En el terreno de oposición encontramos a Colombia, donde la resistencia armada intenta derrotar un régimen cliente del imperialismo. Venezuela es un terreno de masivas confrontaciones; allí Estados Unidos ha emprendido diversos y frustrados intentos de derrocar el gobierno de Hugo Chávez. Por otra parte, grandes movimientos sociales en México, Bolivia, Argentina, Ecuador y Costa

Rica emergieron recientemente para confrontar los regímenes clientes y los patrones imperiales (Petras and Veltmeyer 2005).

Regímenes en transición

El sistema imperial es bastante asimétrico y está en constante movimiento y desequilibrio, toda vez que irrumpen guerras, confrontaciones nacionales y de clases, y crisis económicas que desarticulan regímenes y llevan al poder nuevas fuerzas políticas. Una de las mayores transformaciones ocurridas durante las década de 1980 y 1990 estuvo dada por la transformación o conversión de estados independiente en regímenes clientes del imperio. En el Hemisferio Oeste, esas transformaciones incluyen a Nicaragua, Chile, Bolivia, Argentina, Jamaica y Granada.

Pero a causa de las devastadoras consecuencias de las políticas centradas en el imperio y administradas por los regímenes clientes, la primera década del milenio experimentó una serie de masivos levantamientos populares, especialmente en América Latina. Las movilizaciones populares en Argentina y Bolivia condujeron a la transformación de regímenes clientes en regímenes semi-autónomos. En Venezuela, luego del fallido golpe y las campañas de desestabilización, el régimen de Chávez, definitivamente, adoptó una abierta postura independiente y anti-imperialista.

Los actuales conflictos entre estados imperiales y anti-imperialistas, entre regímenes clientes y movimientos nacionalistas, y entre estados imperiales con estados imperiales emergentes van a redefinir la estructura del sistema imperial. Los resultados de estos

conflictos van a producir nuevas coaliciones entre las principales fuerzas que componen la jerarquía imperial y sus adversarios. Lo que está claro en este escenario es que no existe un estado imperial omnipotente que unilateralmente defina el sistema internacional o imperial. Aún el estado imperial más poderoso ha sido incapaz de consolidar unilateralmente su poder. Los mayores logros de la política imperial en América Latina fueron posible en la medida que los estados imperiales han sido capaces de articular relaciones de clientes con regímenes de centro-izquierda. Las élites colaboracionistas de los regímenes clientes y semi-autónomos han sido piezas esenciales para mantener y consolidar el poder imperial de Estados Unidos en América Latina.

Continuidad y expansión de la influencia de Estados Unidos

Contrariamente a lo que proponen muchos expertos de izquierda y de derecha, hay muchas áreas en las que Estados Unidos incrementó su influencia en los últimos años:

a. Tratados Bilaterales de Comercio

Estados Unidos ha firmado tratados bilaterales de comercio con Perú, Colombia, América Central, México, Chile, Uruguay y varios estados del Caribe. Lo llamativo de estos tratados bilaterales es que Washington no necesitó modificar su extensa política de subsidios al sector agro-exportador norteamericano, ni levantar sus barreras aduaneras o cuotas de importación que pesan sobre más de 200 productos. Aún más, Washington aseguró en los países “contraparte” su libre acceso a sectores financieros de servicios, tecnologías de

punta, educación y medios. En pocas palabras, estos tratados bilaterales son notablemente asimétricos y muy beneficiosos para los sectores no-competitivos y las multinacionales de Estados Unidos.

b. Programas y bases de entrenamiento militar

En los últimos cinco años, Washington aumentó el número de sus bases y se sumó a operaciones militares en América Latina (Johnson 2004). En el año 2005, Washington estableció una importantísima base militar y administración de operaciones en Paraguay, al tiempo que acordó con Uruguay la ejecución de un programa de entrenamiento militar en dependencias locales. En Ecuador (Manta), Brasil, El Salvador, Aruba y Colombia las bases militares de Estados Unidos siguen operando. Anualmente se despliegan operaciones militares conjuntas y programas de entrenamiento militar en todos los países de América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela. Las ventas de armas y ayudas militares hacia regímenes de centro-izquierda no se interrumpieron. Personal de la agencia de control de drogas (Drug Enforcement Agency) y consultores militares de Estados Unidos circulan a lo largo y ancho de América Latina (excepto en Cuba y Venezuela), operando libremente dentro de los servicios de inteligencia y seguridad locales.

c. Presencia económica

Las empresas de Estados Unidos, los servicios bancarios e inversores extranjeros continúan propagándose en América Latina, con altísimas tasas de ganancias, pagos adelantados de deudas y nuevas

oportunidades de adquirir rentables empresas públicas, que están en la mira de sectores privados. Entre el 2003 y 2007, las empresas norteamericanas de servicios y energía, instaladas en América Latina, obtuvieron monumentales ganancias a partir de los incrementos históricos en los precios del petróleo y los metales. Dada la creciente importancia de los nuevos millonarios latinoamericanos, los importadores e inversores europeos, chinos y de otros países asiáticos la participación relativa de los Estados Unidos en las exportaciones, empresas privatizadas, bancos y ganancias en América Latina ha disminuido. Pero la competencia capitalista, que resultó en una relativa disminución de la presencia económica de Estados Unidos, no redujo en absoluto sus márgenes de ganancias (Petras y Veltmeyer 2007).

d. El ascenso neoliberal:
conformismo ideológico

Mientras muchos partidos políticos en América Latina critican el neoliberalismo en sus campañas electorales, muy pocos, por no decir ninguno, han renunciado a la doctrina del libre mercado una vez que llegaron al poder. Con la excepción de Venezuela, ninguno de los gobiernos elegidos entre el 2003 y 2007 ha revertido el proceso de privatizaciones desplegado en el período 1970-2001. Todos estos gobiernos continúan disminuyendo o eliminando sus barreras aduaneras (no propusieron ninguna nueva legislación o medidas proteccionistas). En los Círculos Doha de Comercio Internacional, los países más importantes de Latinoamérica presionan, aun más que Estados Unidos, por una mayor “liberalización” del comercio. Recientemente, la

mayoría de los regímenes de centro-izquierda han aprobado leyes orientadas a privatizar los fondos de pensión, flexibilizar las relaciones laborales (desarticulando los sistemas de protección del empleo) y facilitar la entrada de capitales extranjeros. Las políticas fiscales y presupuestarias de estos países, aún más que en Estados Unidos, se mantuvieron dentro de los lineamientos propuestos por el Fondo Monetario Internacional. En síntesis, en los países de América Latina, con algunas excepciones, existen continuidades estructurales, ideológicas y políticas que sirven de soporte a la constante dominación de Estados Unidos.

Para lograr un mejor entendimiento de perspectivas que exageradamente argumentan que la hegemonía de Estados Unidos ha declinado, es importante contextualizar la presente década dentro del marco del pasado reciente. En este sentido, es necesario comparar los siguientes períodos: el que va de los años 60 a los 70; el que va de mediados de la década de 1970 a 1999; el período comprendido entre el año 2000-2002 y el de 2003 a 2006-7.

Las relaciones de América Latina y Estados Unidos en perspectiva histórica: 1960-1970

Este período estuvo marcado por serios cuestionamientos a la hegemonía norteamericana. Regímenes políticos, movimientos socio-políticos y político-militares cuestionaron los pilares fundamentales e ideológicos de la política internacional y la hegemonía de Estados Unidos, que se mantuvo en el continente por más de una década. En varios países, el poder norteamericano

declinó sustancialmente, reduciéndose así sus posibilidades de movilizar el continente en defensa de su imperio global. En Chile se eligió un gobierno socialista que, con la aprobación unánime del congreso, procedió a la nacionalización de las minas de cobre, que mayoritariamente permanecían bajo control y propiedad de Estados Unidos. A su vez, la nacionalización del cobre aceleró un proceso de reforma agraria que dio lugar a la expropiación de tierras a grandes latifundistas, históricamente aliados con Estados Unidos. También se nacionalizaron bancos, fábricas y empresas pertenecientes a una élite chilena pro-norteamericana y a empresarios de Estados Unidos. Bajo la presidencia de Salvador Allende, Chile se sumó al movimiento de los no-alineados, terminó con el embargo que Estados Unidos impuso a Cuba y fortaleció relaciones con otros regímenes nacionalistas de América Latina.

En Bolivia, Perú y Ecuador, regímenes nacionalista-militares expropiaron a Estados Unidos empresas petroleras y mineras, al tiempo que adoptaron una política internacional independiente y ampliaron relaciones con países comunistas, buscando así sumarse al movimiento de los no-alineados. En Argentina llegó al poder un gobierno nacionalista-peronista que, respaldado por sectores guerrilleros, adoptó una política internacional de corte nacionalista, mientras que una clase trabajadora radicalizada pasó de posturas populista-nacionalistas al socialismo. En México, la presión de movimientos rurales y nacionalistas frustraron los esfuerzos orientados a romper las relaciones con Cuba y avanzar en la privatización de empresas públicas. En Cuba, el gobierno procedió a la

expropiación de empresas norteamericanas y se alió con el bloque soviético, al tiempo que brindaba apoyo a los movimientos revolucionarios en Latinoamérica, África y Asia. En Brasil, los movimientos populares presionaron al gobierno de Goulart para implementar políticas nacionalistas, una reforma agraria y una política internacional independiente.

Ciertamente, una comparación entre los años 2003-2006 con el período que va de 1960-1975 nos puede demostrar que Estados Unidos ha fortalecido su presencia en América Latina, donde, a lo largo de la región, regímenes neoliberales han reemplazado gobiernos nacionalistas y socialistas. Lo que hoy en día se reconoce en América Latina como “nacionalismo” o “radicalismo” en nada refleja lo que la región experimentó en décadas anteriores. Actualmente, Estados Unidos no ha sido objeto de ninguna expropiación en la región; ningún gobierno de centro-izquierda ha procedido a renacionalizar empresas extranjeras, ni aún aquellas que fueron privatizadas bajos procesos viciados de corrupción. Por su parte, Cuba ha dejado de apoyar movimientos revolucionarios o alternativas radicales en Latinoamérica; en cambio mantiene buenas relaciones con el gobierno de extrema derecha en Colombia y se opone a la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) (Petras 2005, entrevista a Perez Roque). Cuba también apoyó en Brasil la re-elección del presidente de centro-derecha, Lula Da Silva, en detrimento de la candidata de izquierda Helena Heloisa. Desde una perspectiva histórica, y si circunscribimos la discusión a la comparación de los períodos 1960-1975 y 2001-2006, fáctica y analíticamente sería

falso sostener que el poder de Estados Unidos ha disminuido en América Latina.

Golpes militares y reveses: la resurgencia del poder de Estados Unidos, 1976-1980

Comenzando con el golpe militar de Brasil en 1964, respaldado por Estados Unidos; la invasión a República Dominicana en 1965, y siguiendo con una serie de golpes respaldados por la CIA en Bolivia (1971), Uruguay (1972/3), Chile (1973), Perú (1975) y Argentina (1976), Washington reestableció su poder y revirtió políticas y leyes que afectaban negativamente a sus grandes propietarios y su política internacional. Todas las dictaduras militares de la región recibieron ayuda financiera de Estados Unidos, tuvieron fácil acceso a créditos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial (iniciando así un masivo ciclo de endeudamiento), a cambio de reprimir toda oposición nacionalista, socialista, democrática y popular. Todos y cada uno de los regímenes de la región rompieron relaciones con Cuba y el movimiento de los no-alineados, y se alinearon con Estados Unidos en todos los foros internacionales.

Estos regímenes militares avanzaron en la desnacionalización de sus economías, eliminaron la legislación socio-laboral que protegía a los trabajadores, revirtieron los programas de re-distribución de tierras y promovieron un modelo de crecimiento basado en exportaciones “libre mercadistas” en detrimento de los mercados locales. Grandes inversiones a largo plazo, norteamericanas y europeas, ingresaron en la región y en muchos casos adquirieron empresas públicas y privadas. La desregulación de las economías

nacionales condujo a la rápida entrada y salida de capitales especulativos. En el más profundo sentido de la palabra, más que golpes militares esto fue un golpe de libre mercado, para lo cual los militares sólo fueron un instrumento.

El único punto de contestación estaba en Centro América, donde el Movimiento Nacional de Liberación Sandinista derrocó la larga dictadura de Somoza, apoyada por Estados Unidos. En El Salvador y Guatemala, poderosos movimientos indígenas y campesinos cuestionaban la dominación norteamericana. No obstante, a principios de la década de 1990, fuerzas militares apoyadas por Estados Unidos derrotaron a los Sandinistas, cooptaron la guerrilla salvadoreña con políticas electorales y aniquilaron la insurgencia indígena en Guatemala.

El período que va de 1976 a 1980 fue una etapa de reemergencia de la “Edad de Oro” del poder norteamericano; con sumisos clientes en control de los gobiernos, en Latinoamérica se promovieron políticas de explotación minera y energética en términos que abiertamente favorecieron una incuestionable obediencia a la política de Estados Unidos.

Los abruptos cambios en la política latinoamericana, en favor de los intereses y la economía de Estados Unidos, condujeron a una marcada polarización social, un explosivo aumento de las desigualdades, el desempleo y la pobreza. A mediados de la década de 1980 se produjeron masivas protestas en Argentina, Chile, Bolivia y otros países de la región (Petras, Leiva and Veltmeyer 1994). La oposición a los regímenes militares-autoritarios fue diversa, al igual que sus demandas. Las clases populares demandaban un retorno a la democracia y el

reestablecimiento de un sistema de bienestar social y nacional. Entre las clases medias, las demandas se articularon en torno a elecciones libres, el reestablecimiento de las libertades individuales y una mayor distribución del poder y los ingresos entre las clases altas y medias. Para la élite burguesa, las principales demandas eran elecciones libres, liberalización y privatización de empresas, incluyendo aquellas que estaban bajo el control militar. Como resultado de las presiones sociales, los militares entregaron el poder a regímenes electorales controlados por élites locales; pero a cambio que les garantizaran impunidad, y seguridad de que no se revertirían las privatizaciones y se mantendrían las relaciones de clases y propiedad establecidas bajo las dictaduras. Mientras los cambios de régimen fueron impulsados, en gran parte, desde abajo (trabajadores y clases medias), el liderazgo y la dirección de las políticas quedaron en manos de políticos íntimamente ligados a la burguesía liberal.

La Edad de Oro de la dominación norteamericana: 1990-2001

Todos los indicadores tanto estructurales como de políticas públicas del período 1975–1989 apuntan a una recuperación substancial y expansión del poder de los Estados Unidos sobre América Latina en comparación con la década anterior. La década siguiente (1990-1999), el período de la restauración de los regímenes electorales, profundizó, expandió y aparentemente consolidó el ascenso de la dominación norteamericana. Los movimientos anti-dictatoriales fueron subordinados a los partidos políticos comprometidos con las políticas liberales favorables a las

corporaciones multinacionales y bancos de los Estados Unidos, Europa y Asia. Los partidos apoyaron la policía exterior de los Estados Unidos y se alinearon estrechamente con las oligarquías financieras y comerciales nacionales. Nunca en el siglo veinte tantos monopolios públicos lucrativos fueron transferidos a inversionistas nacionales y extranjeros, en tantos países y cubriendo un conjunto tan vasto de sectores en menos de una década (Petras y Veltmeyer [eds.] 2004). Nunca tanta riqueza (que suma sobre 900 billones de dólares) en pagos de intereses, ganancias, patentes y recursos han sido apropiados por corporaciones multinacionales norteamericanas, europeas y asiáticas en el curso de una década (1991-2001).

Washington y Bruselas podían cínica y literalmente proclamar que esta era verdaderamente una “Edad Dorada”. A partir del pillaje facilitado por los regímenes electores, Washington y Bruselas consideraron estas masivas transferencias de riqueza como políticas “legítimas” de la “liberalización”, no importando cuán asimétricos fuesen los beneficios, no importando cuán profundas fuesen las desigualdades creadas, no importando cuán intenso fuese el crecimiento de la pobreza, y el éxodo de profesionales, trabajadores especializados o no especializados, pequeños agricultores y campesinos.

Diversos factores internacionales favorecieron esta combinación de elecciones libres y pillaje privado. Estos incluyeron el colapso del comunismo en la ex Unión Soviética y Europa del Este, la anexión de Alemania Oriental y la conversión de sus líderes en clientes de Occidente (Yeltsin, Havel, Walesa y otros). Esto

eliminó los recursos alternativos de comercio y ayuda e inclinó la balanza de poder hacia los Estados Unidos. La crisis económica resultante en Cuba llevó a un brusco giro hacia adentro para evitar el colapso. Cuba disminuyó su apoyo a los movimientos de izquierda en América Latina y la pobreza dejó de ser un estímulo para los programas de desarrollo. El bajo precio de las materias primas redujo los retornos fiscales y fortaleció a quienes propugnaban la privatización y al Fondo Monetario Internacional. China se desplazaba hacia su integración a los mercados mundiales y no estaba entonces en posición de ofrecer un mercado alternativo o de constituirse en un inversionista en externo. El Medio Oeste estaba “bajo control”. Irán estaba debilitado tras la invasión iraquí. Saddam Hussein estaba neutralizado por la Guerra del Golfo. Israel aplastaba la primera Intifada palestina. Los movimientos guerrilleros de Centro América habían sido domeñados e integrados en la política electoral dominada por los clientes neoliberales de los Estados Unidos. Chávez había sido electo sólo hacia los fines de los noventa y estaba aún lejos de adoptar su agenda nacionalista de bienestar.

Lo más importante: Washington había exitosamente apoyado a un conjunto de clientes “ideales” en los países latinoamericanos más grandes y más ricos. Carlos Menem privatizó en Argentina por decreto más empresas públicas (más de un millar) que cualquier otro mandatario. Fernando Henrique Cardoso en Brasil privatizó las empresas estatales más lucrativas, incluyendo la minera de hierro Vale del Doce por un monto de US\$ 400 millones (su valor de mercado en 2007 es superior a los US\$ 10 billones [diez mil

millones de dólares] con retornos anuales que superan el 25%), bancos, telecomunicaciones, petróleo y muchas otras empresas estatales, las que fueron convertidas en monopolios de propiedad extranjera (Petras y Veltmeyer 2003). En México, Carlos Salinas, tras su fraudulenta elección, privatizó más de 110 empresas públicas, abrió las fronteras para las exportaciones agrícolas subsidiadas desde los Estados Unidos, arruinando a más de un millón y medio de campesinos y productores de frijoles, maíz, arroz, cerdos y pollos -y firmó en Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA). Sus políticas permitieron la ocupación por parte de los Estados Unidos de los sectores agrícola, industrial, bancario y de comunicaciones. Patrones similares de ocupación se hicieron evidentes en toda la región. Especialmente en Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Colombia donde las lucrativas empresas del gas, el petróleo y la minería fueron privatizadas y desnacionalizadas.

En sus informes anuales, a través de los noventa, tanto el FMI como el Banco Mundial describieron a estos regímenes como “modelos ejemplares y exitosos”, a ser emulados por el resto del mundo (World Bank 2000). Washington y la Comunidad Europea consideraron este período como de excepcionales ganancias y retornos, facilitado por regímenes acomodaticios, que promueven la liberalización irrestricta como la norma del futuro. Cualquier cosa que se desviase de este “Período Dorado” habría de ser considerado anómalo, inaceptable, amenazante, no democrático y desfavorable para los inversionistas.

La crisis y el colapso de los clientes apoyados por los Estados Unidos: el fin de la Edad de Oro

Inmersos en los “buenos tiempos” y en la retórica de las “elecciones libres y mercados libres”, ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, Washington o la Unión Europea, anticiparon los masivos levantamientos populares y las revueltas electorales desde fines de los noventa hasta la primera mitad de la década siguiente (1999-2006), las que derrocaron o repudiaron a todos y a cada uno de los clientes de los Estados Unidos.

En Ecuador, tres levantamientos populares reemplazaron a tres presidentes consecutivos de orientación neoliberal, bloquearon la privatización del gas y del petróleo como asimismo la suscripción del Tratado Latinoamericano de Libre Comercio. En Argentina, en diciembre de 2001, frente al colapso financiero, el congelamiento de las cuentas de millones de ahorrantes y una profunda recesión económica, una rebelión popular desalojó al presidente De la Rúa y a tres de sus potenciales “sucesores”. En Bolivia, tres sangrientas insurrecciones en enero de 2000, octubre de 2003 y junio de 2005 llevaron al derrocamiento de dos de los más serviles y obedientes clientes de Washington -Sánchez de Losada y su Vice-Presidente Carlos Mesa, ambos notorios privatizadores y ligeros en cuanto a la aplicación de impuestos y a la fiscalización de actividades de contrabando por parte de las corporaciones multinacionales. En Brasil, la presión ejercida por el Movimiento de los Sin Tierra y el descontento urbano llevó a la derrota del presidente en ejercicio, Fernando Henrique Cardoso y a la elección

del aparentemente social demócrata Lula Da Silva (Petras and Veltmeyer 2005).

Lo más importante fueron los esfuerzos desplegados por Washington para desestabilizar al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por oponerse a la política de la administración Bush relativa a la guerra del Medio Oeste, y el subsecuente apoyo a un fallido golpe militar, lo que radicalizó a Chávez y a sus seguidores.

La “Edad de Oro” de Washington condujo a una masiva hostilidad popular hacia los clientes de los Estados Unidos y hacia las políticas de mercado que ellos perseguían. Las mismas políticas que favorecían los intereses comerciales, financieros y militares de los Estados Unidos fueron, precisamente, los que detonaron los levantamientos populares.

A lo largo de la región, muchos de los líderes de las rebeliones e insurrecciones sociales demandaron la renacionalización de las empresas privatizadas, la renegociación de los contratos con las corporaciones multinacionales, el retorno al control estatal de la banca extranjera y el enjuiciamiento de los funcionarios de gobierno implicados en las privatizaciones y en la sangrienta represión de la oposición. En Venezuela, los movimientos demandaron el enjuiciamiento de los golpistas apoyados por los Estados Unidos y la “re-nacionalización” de la compañía petrolera estatal (en reemplazo de diez mil funcionarios petroleros ligados a las corporaciones multinacionales norteamericanas).

El período 2000-2003 fue testigo de una brusca declinación del poder

norteamericano, particularmente de la pérdida de vitales regímenes clientes. Los levantamientos populares representaron la principal amenaza a la posición privilegiada de los bancos multinacionales de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea, y de las industrias del petróleo y de las telecomunicaciones.

En Colombia, el gobernante Presidente Pastrana, cliente de los Estados Unidos, enfrentó el creciente avance de las fuerzas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en menor grado del Ejército de Liberación Nacional. Adicionalmente hubo un incremento sustancial en la oposición sindical y campesina al “Plan Colombia”, diseñado y financiado por los Estados Unidos y a las políticas de libre mercado.

A pesar del alcance y profundidad de la protesta masiva y del éxito de los movimientos populares en el derrocamiento de los regímenes pro-americanos, los fundamentos políticos y económicos del poder norteamericano en el Hemisferio fueron sacudidos pero no removidos. Mientras sectores del aparato de estado asociados con los desprestigiados regímenes clientes de los Estados Unidos fueron forzados a renunciar, las fuerzas armadas, el poder judicial, la policía y los ministerios civiles permanecieron intactos. Mientras algunos de los más prominentes capitalista cleptocráticos trasladaron sus ilegalmente obtenidos recursos líquidos hacia el exterior, la mayoría optó por adoptar un bajo perfil, a la espera de un momento más propicio para reiniciar sus operaciones.

Más importante para los intereses estratégicos de Estados Unidos, los poderosos

movimientos populares no fueron capaces o no estaban preparados para tomar el poder y romper con el modelo neoliberal de libre mercado. En todos y cada uno de los casos en que algún destacado cliente de los Estados Unidos fuera derrocado, éstos eran reemplazados por nuevos presidentes que por necesidad adoptaron una retórica anti-neoliberal. En algunos casos eliminaron o reemplazaron algunas de las figuras más odiadas del régimen anterior, pero generalmente permanecieron dentro de la clase y parámetros políticos del régimen previo. Particularmente antes de e inmediatamente después de tomar el poder estas nuevas elites políticas adoptaron una postura que les posicionaba como de “centro-izquierda”, no muy distinta de la “Tercera Vía” de sus contrapartes europeas (Petras 2007).

Washington fue tomado por sorpresa por la facilidad y velocidad con que sus clientes fueron barridos del poder. Creyendo en su propia retórica triunfalista acerca del “fin de la historia” con el advenimiento de regímenes comprometidos con el mercado y con las elecciones libres, Washington fue incapaz de defender a sus clientes. En muchos casos las alternativas favoritas de Washington, en la derecha, las que fueron preparadas para reemplazar a los títeres caídos, fueron igualmente desacreditadas. Faltos de cualquier capital político, no eran capaces de llenar el vacío político. Dentro de la administración Bush, particularmente entre los asesores políticos del Departamento de Estado (muchos con raíces en el exilio cubano), la respuesta inicial fue una hostilidad generalizada hacia las rebeliones de gran escala, pero también hacia los emergentes regímenes de la centro izquierda. La única excepción fue el ultra-

neoliberal régimen “socialista” de Chile, el cual tuvo el apoyo de extremistas como Otto Reich.

Durante todo el período 2000-2002, Washington hizo pocos intentos por reconocer los principales cambios políticos y económicos, los que han ocurrido tanto internacionalmente como en América Latina, para ajustar las ambiciones del imperio de los Estados Unidos a las nuevas realidades.

La Era de Oro del pillaje de los noventa cegó a Washington a la nueva polarización política y social. Como resultado la mayor parte de sus clientes políticos quedaron aislados. Washington, habiéndose habituado al acceso fácil a sus clientes gobernantes y dependiente de la inteligencia obtenida de los complacientes ministerios del Interior y de Defensa, no estaba preparado para cambiar de caballos antes de la caída.

Más significativamente, la profunda crisis y colapso de 2000-2002 cambió el balance de fuerzas al interior de los países latinoamericanos de una manera tal que hizo prácticamente imposible continuar con la política, ideología y políticas económicas de los noventa.

Las nuevas realidades del siglo XXI

Washington y sus socios comerciales se negaron a reconocer que los noventa fue un período excepcional producto de una particular constelación de circunstancias que eran transitorias y no enteramente replicables.

El miedo generado por los dictadores militares de los setenta en la opinión pública dejó de constituir un freno para los movimientos de

masas. La nueva generación no ha sufrido la tortura, la prisión ni el asesinato masivo. La experiencia formativa primaria fue la movilidad descendente, el colapso financiero, el desempleo, la pérdida de los ahorros y oscuras perspectivas para el futuro.

Los comienzos de los noventa fueron testigo de la introducción de profundas políticas neoliberales. Los clientes de los Estados Unidos hicieron grandes promesas de prosperidad compartida, de ingreso al Primer Mundo e importaciones de bajo costo. Al final de la década ninguna de las promesas de mejoramiento de la calidad de vida se cumplieron para la gran masa asalariada.

Las políticas de libre mercado llevaron a la quiebra a millones de pequeños agricultores campesinos (Petras and Veltmeyer 2003). Más de la mitad de los trabajadores del sector manufacturero fueron arrojados al sector informal. La desregulación llevó a la crisis bancaria, al fraude y la pérdida masiva de los ahorros de la clase media. Las empresas estatales privatizadas despidieron a sus trabajadores, cerraron las subsidiarias poco rentables y la mayor parte de los trabajadores permanentes fueron reemplazados por “trabajadores subcontratados”.

La ilusión de las masas acerca de la “prosperidad y del libre mercado” se tornó en una amarga e iracunda decepción. No obstante, Washington continuó viviendo con la ilusión que las masas todavía estaban encantadas con las promesas neoliberales y que veían el desorden como resultado de la acción de extremistas externos. La expresión más bizarra fue la omisión por parte de los informes del Banco Mundial y del Fondo

Monetario Internacional acerca del colapso de los regímenes clientes y de las revueltas populares (Word Bank 2002). De acuerdo a sus economistas, la razón del colapso era que ¡las “reformas económicas” no habían sido implementadas a cabalidad o de manera correcta en los tiempos apropiados! El mensaje a los clientes latinoamericanos era de “seguir adelante”. El único problema era que no existían agencias pro-norteamericanas viables para recomenzar las políticas de la “Edad Dorada”.

Paralelo con los vastos cambios políticos y económicos dentro de América Latina, que tornaron inviable la continuación de las políticas de la “Edad de Oro”, importantes cambios ocurrían fuera de América Latina. Washington se negaba a aceptar las reformas tributarias, sociales y de política exterior en Venezuela. En cambio, los Estados Unidos apoyaron el golpe militar de abril de 2002 y la paralización de las corporaciones petroleras a fines del 2002 y comienzos del 2003 (Ellner 2006).

Indiferente al apoyo popular del Presidente Chávez, la Casa Blanca procuró financiar y promover los frentes electorales y a las ONGs para derrotarle. Cada uno de los fallidos intentos de Washington fortaleció las políticas internas y de relaciones exteriores venezolanas al tanto que eliminó importantes recursos norteamericanos.

Chávez llevó su caso a América Latina y el apoyo popular a Chávez se disparó. Los nuevos regímenes de “centro-izquierda” firmaron lucrativos acuerdos energéticos y de comercio. Lejos de acomodarse al limitado rango de cambios propuestos inicialmente por Chávez,

los fallidos intentos desestabilizadores de los Estados Unidos terminaron por expandir el área de influencia venezolana y por fortalecer su convocatoria a políticas de bienestar públicas a lo largo de América Latina. El factor Chávez fue en gran parte un contrabalance importante de los Estados Unidos, dados los fuertes incrementos en los precios del petróleo durante el período 2002. Entre la mitad de los noventa y los 2000, el precio del petróleo se quintuplicó.

Igualmente importante, el nuevo milenio fue testigo de un vasto incremento en los precios de las productos y materias primas. El cobre, el níquel, el acero, la soya, la carne, los granos, el oro y la plata, tanto como otras materias primas que se duplicaron o triplicaron en sus precios. En buena parte esto fue el resultado del crecimiento de dos dígitos de la industria China. En efecto, la demanda por materias primas proliferó en las naciones asiáticas tras la recuperación de la crisis y recesión de fines de los noventa. India creció sobre un seis por ciento, Japón salió de su “década perdida”, Corea del Sur se sobrepuso en 1997 a la crisis económica y China creció por sobre un diez por ciento.

Los Estados Unidos perdieron en parte su influencia económica basada en el refinanciamiento de la deuda, el dominio comercial y el monopolio tecnológico. La diversificación del comercio y de las inversiones por los nuevos regímenes de “centro izquierda” se basó en la conservación del modelo neoliberal pero trabajando con sus nuevos socios asiáticos. Los intentos de Washington por usar la “varilla económica” de los noventa resultaron menos efectivos para dictar las políticas a una buena parte

de naciones latinoamericanas. No obstante, Washington insistía en aplicar presión.

Los nuevos y más diversos socios comerciales, las crisis económicas en América Latina y el crecimiento de los movimientos populares significaron abortar el intento de Washington para imponer a América Latina en una posición privilegiada a través del llamado Tratado de Libre Comercio Latinoamericano (ALCA). Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia rechazaron la naturaleza unilateral del ALCA, por el hecho que los Estados Unidos demandaban que los países latinoamericanos rebajaran todas las barreras comerciales en todos los sectores económicos mientras que Washington continuaba subsidiando la agricultura con 21 mil millones de dólares, estableciendo cuotas para doscientas mercancías exportables desde América Latina y el destemplado uso de barreras “no-tradicionales” al comercio.

Clinton inició el ALCA y firmó con México el NAFTA en los inicios de los noventa (La Edad Dorada del Pillaje). Bush, enfrentado a una fuerte resistencia, se volcó hacia acuerdos bilaterales de comercio con los clientes gobernantes de Centro América, el Caribe, y América Latina. En vez de reconocer las nuevas realidades y la necesidad de desarrollar acuerdos de libre comercio basados en relaciones más simétricas con los nuevos regímenes neoliberales de “centro izquierda”. Washington persistió en sacrificar vastas oportunidades económicas para la exportación de productos no agrícolas, especialmente hacia Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Washington falló de modo evidente al no tomar en cuenta los vastos cambios en el ambiente

internacional. Rusia ya no era regido por su cliente borracho, Boris Yeltsin, rodeado por gánster cleptocráticos diabólicamente inclinados al pillaje del país y a acomodar todas y cada una de las políticas emanadas de Washington. Bajo el Presidente Vladimir Putin, el capitalismo ruso fue normalizado. Crecimiento, inversiones, incremento en los niveles de vida e intereses nacionales fueron sistemática y coherentemente procurados. El auge del precio del petróleo, del gas y de otras materias primas estimuló la recuperación de la industria rusa y su búsqueda de mercados extranjeros. Rusia, una vez más, emergió como una alternativa potencial de inversiones y como socio comercial para los países latinoamericanos, especialmente en los campos del desarrollo energético, la compra de armas y de inversiones conjuntas.

Tal como se mencionara antes, el apetito voraz de China por nuevas materias primas abrió oportunidades para un comercio alternativo y para nuevas inversiones para las industrias agro-mineras de América Latina. Washington fracasó en reconocer que la expansión de Rusia y de los países asiáticos socavó la hegemonía norteamericana en América Latina y persistió en empujar propuestas añejas de “integración” que no se hicieron cargo de la nueva dinámica global.

Incluso las opciones militares, frecuentemente usadas en el pasado, fueran amenazas o intervenciones, fueron severamente debilitadas por la administración de Bush al involucrarse en prolongadas e indefinidas guerras en Irak y en Afganistán. La invasión norteamericana y ocupación de Irak y Afganistán llevó a una masiva resistencia, la que ató a la gran masa de combatientes y reservas. Las pérdidas

acumulativas en muertos y heridos alcanzó a treinta y dos mil; el costo financiero escaló por sobre los quinientos mil millones de dólares hacia mediados de 2007 (Petras 2007). La oposición de la población norteamericana a la guerra excede al 70% de la población. La erosión del apoyo a la agenda militar de Bush en el Medio Oriente y Asia y el agotamiento de las fuerzas militares activas debilitó la capacidad de Washington para involucrarse en nuevas intervenciones obstruyó la posibilidad de intervenir para generar amenazas creíbles contra los intereses de Estados Unidos en América Latina. A diferencia de lo ocurrido en los noventa, tras la victoria de Bush sobre Irak, la declaración de Bush junior de una “guerra permanente” suena hueca frente a la retirada de las fuerzas norteamericanas de las calles de Bagdad a sus refugios de concreto.

La Administración Bush podría recurrir a la opción militar en América Latina, pero las perspectivas de asegurar un apoyo latinoamericano, europeo, asiático e incluso público a tales opciones es dudosa, especialmente si se torna en una operación prolongada con bajas. La extrema generalidad de la Guerra del Terror y el carácter extremadamente colonialista de las estrategias adoptadas en Irak han debilitado severamente la capacidad de Washington para intervenir en países adversarios de América Latina. Los cambios regionales e internacionales desde la “Edad de Oro” de la dominación norteamericana han influido decisivamente en la discusión acerca de “la declinación del poder norteamericano”.

La fluidez de la hegemonía: pérdidas relativas, ganancias relativas (2003-2007)

Si consideramos el poder de los Estados Unidos en América Latina, hay signos claros de la declinación de su influencia en la diversificación de las fuentes de ingresos derivados de las exportaciones, inversiones y empresas conjuntas. No obstante, ninguna de las corporaciones multinacionales norteamericanas ha sufrido los efectos adversos. Lo peor que podría decirse que les ha ocurrido es el tener que pagar algo más de impuestos al gobierno venezolano. En parte porque simplemente los impuestos previos eran extraordinariamente bajos. Por ejemplo, en los campos petroleros del Orinoco los impuestos subieron de un 1% a un 15%, aproximándose actualmente al 33% -un cambio sí pero difícilmente una pérdida de ganancia si se consideran los actuales precios del petróleo. Las grandes compañías petroleras norteamericanas (Chevron, Exxon) continúan operando en Venezuela, cosechando ganancias a destajo. Los Estados Unidos han perdido influencia en la mayoría (aunque no en todos) los círculos de gobierno en Venezuela. Sin embargo, Washington mantiene numerosos clientes en el sector privado, incluyendo los medios de comunicación. Financia y apoya a un vasto grupo de organizaciones no gubernamentales, a un puñado de partidos políticos, a un burocratizado aparato sindical y a sectores de la jerarquía católica. Los clientes de Washington incluyen a elites de amplios sectores del comercio, los servicios y las finanzas, a importantes sectores de las clases profesionales de los sectores público y privado (médicos, profesores, asesores, relacionadores públicos y abogados). A pesar

de ciertas pérdidas, el Pentágono mantiene influencia entre sectores de la Guardia Nacional, la policía secreta (DISIP) y las Fuerzas Armadas. En otras palabras, a pesar de las fallidas intenciones norteamericanas (golpe, boicot electoral, cierres), que han resultado en la pérdida de aliados claves, aún mantiene importantes recursos para influir en la política nacional e internacional venezolana. Si renunciaran a su “ideal de los noventa” y se adaptaran a las nuevas realidades de nacionalismo y del bienestar social, los clientes de Washington podrían retomar fuerza como oposición.

A través de América Latina, los regímenes de “centro-izquierda” en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y otras partes han severamente debilitado a los movimientos de masas, desradicalizando las demandas de las luchas sociales y, al menos parcialmente, relegitimando las privatizaciones que tuvieron lugar en los noventa (Petras and Veltmeyer 2005).

Si comparamos los períodos 2004-2006 con 2000-2003, está claro que el poder de los Estados Unidos no ha declinado, que no está enfrentando desafíos profundos a su amplio dominio militar y económico en América Latina. El Presidente argentino Kirchner ha domeñado y cooptado a muchos de los líderes insurreccionales, canalizando a la rebelde clase media en el curso electoral y a los sindicatos en las luchas salariales o, en el mejor de los casos, hacia políticas reformistas. Aún más sorprendente, el presidente brasileño Lula da Silva ha adoptado completamente la doctrina de libre mercado-elecciones libres de los noventa y ha profundizado y extendido el restrictivo presupuesto y políticas salariales y de pensiones

de su predecesor (Cardoso) al tiempo que ha ampliado el programa privatizador. Ninguno de los presidentes brasileños popularmente elegido ha sido lo exitoso que Lula en desmovilizar a los movimientos de masas y los sindicatos y, aún más, convertirlos en cintas transportadoras para sus políticas a favor de las corporaciones multinacionales.

No obstante, la conversión de Lula al mercado libre a través de una estrategia agro-minera exportadora lo ha puesto en conflicto con las políticas proteccionistas de los Estados Unidos para sus productos subsidiados del sector agro-exportador. Es la creencia intransigente de Washington de que lo “puede tener todo” -como en los noventa- lo que ha confabulado para que Brasil no suscriba el ALCA. Hoy la misma clase de los noventa gobierna la economía brasileña. Las mismas políticas macroeconómicas de estabilización están presentes. El mismo Banco Central desarrolla las políticas de altas tasas de interés para la generación de superávit que se practicaron en los noventa. Brasil, como en el pasado, mantiene relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Lula, Celso Amorin, es un liberal proclive a Washington, que fue embajador de Cardoso ante los Estados Unidos. Él es un partidario abierto de un “comercio libre simétrico” y ha divorciado a Brasil de las principales críticas de Chávez al imperialismo. Brasil avanza en la diversificación de sus exportaciones hacia Asia, involucrándose en lucrativas empresas conjuntas con Venezuela. Esta es parte de una nueva realidad que Washington ha sido incapaz de entender.

Lula podría ser un recurso estratégico en la agenda de Washington para abrir nuevas

oportunidades de negocios y para minimizar los desafíos provenientes de las fuerzas sociales y nacionalistas en Brasil y a lo largo de América Latina. En Brasil, durante el período de 1999-2001 (antes de la elección de Lula) existía una fuerte oposición extra-parlamentaria y congresista a las políticas neoliberales, intensas demandas para revertir las privatizaciones de Cardoso y un desacreditado gobierno cliente. Durante los seis años del régimen de Lula se ha reforzado la economía neoliberal, favoreciendo los intereses financieros y de negocios de los Estados Unidos y se ha profundizado la integración a los mercados mundiales (Petras 2007). El intento de los Estados Unidos por presionar a Brasil hacia una conformidad ideológica y a una inaceptable política unilateral de libre comercio ha sido el principal obstáculo para ganar influencia allí.

La construcción del imperio en un tiempo de nuevas realidades políticas y económicas.

El poder no fluye simplemente de las estructuras de los colaboradores de Estados Unidos sea que incluyan grandes grupos económicos, regímenes clientes o economistas entrenados en los Estados Unidos, el poder también emana de las clases organizadas, de las comunidades étnicas y las insurrecciones populares casi espontáneas. Las últimas, bajo ciertas circunstancias, pueden desafiar o derrocar regímenes clientes y, en períodos excepcionales, abolir instituciones que colaboran con el imperialismo norteamericano.

Tal como lo hemos visto en los últimos cincuenta años, las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina no son fijas en el tiempo y en

el espacio. Son fluidas y reversibles en décadas o en períodos aún más breves. Los comentarios a veces impresionistas de los escritores discursivos acerca de una declinación de largo aliento del poder de los Estados Unidos o de la hegemonía o de los “quinientos años de dominación” fallan al no considerar las cambiantes correlaciones de fuerzas dentro de América Latina y en el mundo, los cambios en los mercados mundiales y el crecimiento, caída y re-emergencia de los adversarios de los Estados Unidos tanto en América Latina como en el mundo.

En la historia reciente hemos visto períodos alternados de gran influencia de los Estados Unidos sobre América Latina y otros momentos de declinación del poder y emergencia de movimientos y regímenes contra-hegemónicos. La base estratégica del poder norteamericano en América Latina es estructural. Está situada en los negocios cumbre, en elites agro-mineras y bancarias, apoyadas por regímenes colaboradores e instituciones estatales (militares, poder judicial, bancos centrales, agencias de inteligencia y medios de comunicación). Desde “afuera”, la influencia de los Estados Unidos se ejerce a través de sus programas militares y del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo. Las operaciones de inteligencia de los Estados Unidos y los grupos políticos proveen una pretensión institucional adicional sobre los procesos de toma de decisión en América Latina (Petras and Morley 1990). La principal debilidad estratégica del poder de los Estados Unidos en América Latina son los gobernantes clientes que, en pos de los intereses norteamericanos, pierden

rápida legitimidad, apoyo público y son vulnerables al derrocamiento. Sus políticas de ajuste estructural y de “libre mercado” favorecen a los negocios y bancos norteamericanos, pero irritan a los asalariados, campesinos, pequeños comerciantes, empleados públicos y profesionales. Como resultado, la gran mayoría de los movimientos sociales organizados se oponen a las políticas de los Estados Unidos. Prácticamente no existen movimientos de masas pro Estados Unidos. La experiencia histórica y la conciencia, particularmente los sentimientos nacionalistas, son especialmente suspicaces y predispuestos a criticar las motivaciones, presencia y políticas de los Estados Unidos.

La miopía de las proyecciones históricas

Las visiones lineales de las tendencias de largo plazo acerca del ejercicio del poder de los Estados Unidos en América Latina son casi siempre miopes y han demostrado ser erradas en los últimos cincuenta años. Aún una mirada sucinta de los dramáticos cambios de poder en los últimos seis años provee amplia evidencia acerca de lo profundo y abruptos que pueden ser los cambios de poder.

La caída de los regímenes clientelares y la ola de movimientos insurreccionales y anti neoliberales durante 2000-2002 fueron seguidas por cinco años de una cierta estabilidad de los regímenes neoliberales. Sus gobernantes defendieron los intereses y negocios de los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, hicieron pagos anticipados de las deudas externa, usando el superávit fiscal para pagarlas, y neutralizaron los movimientos anti-imperialistas en

Argentina, Brasil, Uruguay, y Perú. La “nueva realidad” es una recuperación parcial del poder y dominio ejercidos por los Estados Unidos durante la “Edad de Oro” de los noventa.

Mientras los desinformados e ideológicamente comprometidos asesores de la Administración Bush y algunos progresistas europeos enfatizaron las credenciales nominalmente “de izquierda” de los nuevos regímenes en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, la realidad es que poco ha cambiado en la propiedad básica, estructuras de clase e ingreso de estos países. Pequeñas recuperaciones en sueldos y salarios se han empatado con las pérdidas en pensiones y otros beneficios sociales. Los cambios iniciados por algunos de estos regímenes han profundizado, en algunos casos, los intereses norteamericanos. En 2007, Uruguay suscribió un acuerdo de libre comercio y un acuerdo de inversiones sin precedentes con los Estados Unidos. Brasil lleva adelante un programa de reformas laborales y previsionales para disminuir costos y facilitar el despido de trabajadores, al tanto que continúa disminuyendo los gastos en las pensiones del sector público. En Argentina, un número de jueces corruptos de la Corte Suprema, junto a policías y militares, fueron llamados a retiro. Algunos de los militares involucrados en tortura y asesinatos masivos durante la dictadura están enfrentando juicios. En Venezuela y Bolivia, modestos incrementos en los royalties y en impuestos han sido aplicados a multinacionales norteamericanas, brasileñas y europeas. Bolivia ha asegurado modestos incrementos en el precio del gas cargado a Argentina. Aún en los así llamados “regímenes radicales” los intereses básicos de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea no han sido

expropiados. En Bolivia se ha invitado a nuevos inversionistas en términos que son apenas menos favorables de lo que fueron durante los noventa (Petras 2007). Bolivia y Venezuela, al sustituir el pillaje por los acuerdos de lucro compartido modifican -aunque no terminan- con las operaciones norteamericanas en América Latina. Aún en Cuba se han hecho inversiones de gran escala y a largo plazo en diversos sectores que van desde empresas conjuntas con plantaciones israelitas de cítricos hasta hoteles de propiedad española, operaciones fabriles y mineras de propiedad Mexicana y China, hasta operaciones francesas y venezolanas de exploración petrolera, biotecnología y empresas farmacéuticas. Hacia 2006, los exportadores agro-empresariales de los Estados Unidos de 34 estados habían vendido mil millones de dólares en productos agrícolas al mercado cubano en la última década. La política exterior cubana ha creado lazos más cercanos con el derechista presidente Uribe de Colombia, apoya al actual Presidente neoliberal de Brasil, Lula Da Silva, y compra mucho más productos agrícolas de los Estados Unidos que su aliado radical, Bolivia (Ernst and Young 2006).

El fracaso de Washington para explotar la favorable coyuntura de 2003-2006 es el resultado de su propio extremismo ideológico, basado en un criterio no realista. Este incluye la idea según la cual la servidumbre de los regímenes clientes latinoamericanos de los noventa y la completa aceptación de las demandas norteamericanas puede ser replicado. Los asesores neo-conservadores y anti-cubanos no se pueden adaptar a estas

nuevas realidades y explotar las nuevas oportunidades. La política de la confrontación contra Venezuela y Cuba bajo condiciones internas y circunstancias internacionales altamente desfavorables ha llevado a Washington a un callejón sin salida. Hoy es Washington que está aislado de la mayoría de los países no alineados, al igual que sus aliados en Europa y América Latina en lo relativo a su embargo económico. El verdadero problema que enfrenta Estados Unidos no es seguir perdiendo en una confrontación con regímenes pragmáticos como Cuba, Venezuela o Bolivia, con la esperanza de lograr su inmediato colapso, sino reconocer que la acomodación mutua puede disminuir la hostilidad internacional y salvaguardar los intereses económicos estratégicos de los Estados Unidos.

Para la izquierda, la posibilidad de un cambio radical en América Latina depende en gran medida de la continua intransigencia e insistencia de los Estados Unidos de volver a la "Edad de Oro del Pillaje". Los avances de la izquierda pueden darse a partir de reconocer que una minoría de sindicatos y algunos movimientos están desafiando a los presidentes neoliberales de Brasil, Argentina y Uruguay. La izquierda necesita reconocer que tanto en Bolivia como Venezuela existen profundas fisuras sociales entre los partidos gobernantes y entre éstos y la clase trabajadora. Es insuficiente concentrarse sólo en el conflicto entre Chávez y Morales, por un lado, y la oposición de derecha de la clase alta y los Estados Unidos, por la otra.

Bibliografía

Michael Hardt and Antonio Negri. 2000. *Empire*. New York: Harvard Press.

Petras, James. 2002. "A Rose by Any Other Name? The Fragrance of Imperialism". *The Journal of Peasant Studies* 9, 2.

Chalmers Johnson. 2004. *The Sorrows of Empire*. USA: Henry Holt

Petras, James and Veltmeyer, Henry. 2007. *Juicio a las Multi-Nacionales*. México-Buenos Aires: Lumen.

Petras, James and Veltmeyer, Henry. 2006. *Imperio con Imperialismo*. México: Siglo XXI.

OECD. 2005-2006. Report China (*Economic Survey, Review of Agricultural Policies, Governance Policy*). Washington, DC: OECD.

Petras, James and Veltmeyer, Henry. 2005. *Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia and Ecuador*. London: Pluto Press London.

Petras, James. 2005. "Interview: Cuban Foreign Minister Felipe Perez Roque". February 8. Personal document.

Petras, James; Leiva, Fernando y Veltmeyer, Henry. 1994. *Democracy and Poverty in Chile*. Colorado: Westview.

Petras, James and Veltmeyer, Henry (comp.). 2004. *Las Privatizaciones y la Desnacionalización de América Latina*. Buenos Aires: Prometeo.

Petras, James and Veltmeyer, Henry. 2003. *Cardoso's Brazil: A Land for Sale*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

World Bank. 2000. *Economic Reports 1990-2000*. Washington, DC: World Bank.

Petras, James. *Rulers and Ruled*. Atlanta: Clarity Press 2007)

World Bank. 2002. *World Bank Annual Report 2001*. Washington, DC: World Bank.

Ellner, Steve. 2006. *Venezuela: Hugo Chavez and the Decline of Exceptional Democracy*. Lanham, MD: Roman and Littlefield.

Petras, James and Morris Morley. 1990. *US Hegemony Under Siege*. London: Verso.

Petras, James. 2007. "Between Insurrection and Reaction: Evo Morales. Pursuit of 'Normal Capitalism'". *Fourth National Congress of Sociology of Bolivia*. April 14. La Paz.

Ernst and Young. 2006. *Business Guide to Cuba*. Barbados: s/e.